

ECUADOR Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero.

Director: Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP
Primer Director: José Sánchez Parga. 1982-1991
Editor: Hernán Ibarra Crespo
Asistente General: Margarita Guachamín

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES

Publicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos y estudios impresos son canalizados a través de la Dirección y de los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

© ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$ 45

ECUADOR: US\$ 15,50

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 15

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US\$ 5,50

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Telf: 2522763 . Fax: (5932) 2568452

E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

PORTADA

PuntoyMagenta

DIAGRAMACION

Martha Vinueza

IMPRESION

Albazul Offset



ISSN-1012-1498

ECUADOR DEBATE 80

Quito-Ecuador, Agosto del 2010

PRESENTACION / 3-6

COYUNTURA

Diálogo sobre la coyuntura: Vicisitudes del presidencialismo
y de la intervención estatal / 7-22

El desarrollo del mercado de valores en el Ecuador: Una aproximación
Luis Rosero / 23-34

Conflictividad socio-política: Marzo – Junio 2010 / 35-44

TEMA CENTRAL

¿Más allá de la democracia representativa procedimental?

Carlos de la Torre / 45-62

Para una democracia de alta intensidad

Boaventura de Sousa Santos / 63-76

El presidente Rafael Correa y su política de redención

Pilar Pérez Ordoñez / 77-94

Apuntes sobre la polarización política en Venezuela y los países andinos

Margarita López Maya / 95-104

La nueva izquierda indígena-nacionalista en Bolivia

Sofía Cordero / 105-120

Una democracia de rostro populista

Patricio Moncayo / 121-136

DEBATE AGRARIO

Movilización campesina en la costa (1950-1963)

Hernán Ibarra / 137-148

ANÁLISIS

Crítica, política, modernidad (Bolívar Echeverría y el marxismo)

Rafael Polo Bonilla / 149-154

Gabinetes itinerantes, enlaces ciudadanos y consejos comunales

Janeth Patricia Muñoz / 155-178

El secuestro, un nuevo rostro de la vulnerabilidad del migrante
centroamericano en México

Rodolfo Casillas / 179-196

Poder, dependencia y pobreza: invisibilización en el África subdesarrollada

Germán Carrillo García / 197-218

RESEÑAS

Petropolítica. Una teoría de la gobernanza energética / 219-220

Historia del Ecuador en contexto regional y global / 221-228

COYUNTURA

Diálogo sobre la coyuntura: Vicisitudes del presidencialismo y de la intervención estatal

Participantes: Mario Unda, Investigador del Centro de Investigaciones CIUDAD; Pablo Ospina, Profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar; Felipe Burbano, Profesor Investigador de FLACSO-Sede Ecuador; Hernán Ibarra, Investigador Principal del CAAP.

Las resistencias a la intervención y regulación del Estado se han manifestado en múltiples conflictos sectoriales que recorren un amplio espectro de grupos sociales que sin embargo se caracterizan por su alta fragmentación. En tanto que se han hecho presentes las condiciones para un bloqueo institucional por la carencia de una mayoría legislativa de Alianza País.

Todo aquello que había configurado una situación incuestionada de la acción hegemónica del gobierno ha ingresado en un ambiente de crisis con algunas expresiones: conflictos sectoriales por la aprobación de las leyes de Recursos Hídricos, Educación Superior y Medios; una abierta confrontación con los movimientos sociales e incluso una pérdida de aliados en la *intelligencia* de izquierda. El camino que se trazó después de la aprobación de la Constitución ha venido encontrando resistencias que muestran una oposición social y política a lo que Correa definió en 2009 como la radicalización de la Revolución Ciudadana. El liderazgo de Correa y su capacidad de copar la acción pública ha llegado a un límite que tiene que ver con resistencias a la intervención y regulación del Estado en condiciones de que Alianza PAIS no

se ha consolidado como actor político y que su capacidad de realizar alianzas se ha deteriorado. Sin embargo, en la oposición política no se divisa un proyecto alternativo.

El gobierno se ha enfrentado al movimiento indígena en varios escenarios. El principal con las movilizaciones que cuestionaron la Ley de Recursos Hídricos y que terminó en la postergación de su aprobación con una consulta pre legislativa. El otro, con el debate de la justicia indígena. Esto tiene que ver con la demanda del movimiento indígena por institucionalizar su visión de la plurinacionalidad.

El debate sobre la Ley de Educación Superior también ha concitado una amplia alianza de universidades públicas y privadas que busca mantener mecanismos de autonomía y capacidad de acceso a los recursos públicos.

La controversia en torno a la Ley de Medios ha estado signada por una ofensiva de los medios que disputan su capacidad de impugnación al gobierno. Los medios privados de comunicación sobre todo se han centrado en la defensa de la libertad de expresión como un argumento frente a la intención de crear mecanismos de regulación y control desde la institucionalidad estatal. Es un conflicto que plantea una vieja manera de autodefinición de los medios acerca de normas de tipo liberal en la formación histórica de la opinión pública sustentadas en la deliberación de ciudadanos libres. Esta autodefinición no considera la complejidad del espacio público como ámbito comunicacional que incluye empresarios y conglomerados de medios, la presencia de los medios públicos, además, la irrupción de internet que está alterando el papel de los medios impresos. En este debate ha sido muy frustrante la ausencia de posiciones que planteen la autonomía de la profesión periodística ante las empresas mediáticas.

La crisis del diario *El Telégrafo* puede considerarse como la consecuencia de una falta de perspectiva del gobierno en la definición de un diario público, más allá de sus limitaciones de haber surgido de un antiguo periódico rediseñado con serios problemas de circulación. Esto puso en una posición crítica a la intelectualidad comprometida con la Revolución Ciudadana.

Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que operaron sin dificultades después de la aprobación de la Constitución, tenían el problema de que AP no contaba con una mayoría. Requería de alianzas con el MPD y Pachakutik o de

independientes. Los aliados de izquierda se perdieron en el marco de la descorporativización propuesta por AP. Después de un año de funcionamiento de la Asamblea Nacional, ésta ya no puede ser una prolongación del Ejecutivo tal como ocurrió durante el funcionamiento de la Comisión de Legislación. Las leyes han entrado en un limbo de postergación ante la dificultad de formar mayorías legislativas. Emerge la encrucijada de disolución de la Asamblea Nacional y la posibilidad de un período gubernamental de decretismo.

¿Cómo entender esta situación de oposición desde los movimientos sociales y la izquierda a un gobierno del mismo signo? ¿Serán viables salidas pactadas o por consensos? ¿Qué alianzas son posibles?

Mario Unda. Me parece que afirmar que existe oposición de los movimientos sociales y de la izquierda a un gobierno del mismo signo no es adecuado. Este gobierno no es de izquierda: lo que hay, en realidad, es una discrepancia de proyectos. A pesar de ciertos signos de identidad discursiva inicial no existe una unidad profunda entre el proyecto no acabado, no escrito que adelantaron los movimientos sociales en la época de resistencia al neoliberalismo, con el proyecto que el gobierno termina encauzando. El gobierno lo que hace es recoger y distorsionar el programa de la lucha social, y encauzarlo más bien hacia una reforma capitalista, centrada, por ahora, sobre todo en lo que entiende por reforma del Estado.

Pero, además, se produce un desplazamiento luego de la última elección, tras la cual Correa anuncia la radicaliza-

ción de la “revolución ciudadana”. Como resultado hubo, por un lado, una profundización de la reforma centrada en el Estado como actor central del proyecto, y, por otro lado, un desplazamiento de las alianzas. El gobierno dejó de buscar sus cercanías hacia la izquierda y empezó a buscarlas hacia su derecha y, sobre todo, hacia los grupos empresariales. A partir de entonces hay una serie de políticas concretas que comienzan con fuerza en el momento de la crisis, tras las reuniones que tuvo Correa en Guayaquil con los empresarios. Y este desplazamiento fue acompañado, a su vez, por una radicalización de los ataques a los movimientos sociales, sobre todo a la CONAIE, porque ahora Correa y el gobierno han convertido a los indígenas en un enemigo fundamental de la “revolución ciudadana”. Esto pudimos verlo con claridad absoluta en el conflicto de la Ley de aguas y, en seguida, en el alboroto armado en torno a la justicia indígena.

Entonces, lo que estamos viendo es un desplazamiento, la búsqueda de un nuevo marco de alianzas para sustentar la propuesta del gobierno; en este momento, la radicalización de la “revolución ciudadana” aparecería como un corrimiento hacia su derecha. Queda así configurado el panorama como un enfrentamiento múltiple: por un lado, el gobierno enfrentándose a la derecha tradicional y a las cámaras empresariales, pero tratando de acercarse a grupos empresariales “más modernos” (e incluso al conjunto de la burguesía); y, por otro lado, el gobierno enfrentándose a las organizaciones y a los movimientos sociales.

En este plano, hemos sido testigos de un equívoco político en algunos sectores de los movimientos sociales, que es esta suerte de alianza oportunista con grupos de la derecha tradicional (o remozada), lo que revela las dificultades que tienen los movimientos sociales y la izquierda para construir una posición política que sea capaz de enfrentar al mismo tiempo el antiguo proyecto que se ha identificado como “la larga noche neoliberal” y el nuevo proyecto de dominación que es esta llamada “revolución ciudadana”. Frente a esta doble tarea, todavía las izquierdas y los movimientos no dan con el modo de situarse en la coyuntura de una manera que vaya más allá del interés coyuntural inmediato y más allá del discurso ideológico.

Pablo Ospina. No veo tan claramente un corrimiento hacia la derecha, lo que veo es que el gobierno da golpes hacia los dos lados al mismo tiempo. Tiene algunos golpes claros contra la izquierda que ya ha mencionado Mario. Al respecto, no veo ninguna posibilidad de reconciliación entre los grandes movimientos o las grandes organizaciones sociales y el gobierno. El gobierno asumió plenamente la idea de que eso no tiene arreglo y ahora está en una franca y abierta campaña para debilitarlos y destruirlos. Es muy claro en el caso de la UNE y la CONAIE, las dos más grandes organizaciones sociales del Ecuador. Con la única gran organización social con la que todavía no tiene problemas es con la Federación de Choferes, con la cual se lleva relativamente bien, precisamente porque es bastante corporativista, particularista, y por lo tanto, es más fácil negociar. En cambio, con las orga-

nizaciones más politizadas, le resulta más difícil negociar porque no acepta negociaciones sobre la orientación del proyecto político.

Pero también tiene algunos golpes a la derecha: la Ley de Comunicación es un claro enfrentamiento con los sectores empresariales de los medios de comunicación. También el Informe de la Comisión de la Verdad, le creó bastantes fricciones con el bloque social cristiano y sus sucesores. Hay un giro claro a la derecha en el tema de la lucha contra la delincuencia, con una serie de medidas de impacto mediático, y por las restricciones a los migrantes colombianos: al principio quería tener una política más abierta y después empezó a cerrar los grifos. Me parece que el gobierno tiene alianzas puntuales sobre temas específicos a todos lados pero que en términos globales se perfila como un proyecto bastante aislado de las fuerzas sociales realmente existentes. Es un proyecto bastante centrado en la capacidad del Estado de convertirse en un ente autónomo que controle los principales resortes de la vida económica y social. Ese es su proyecto político, pero es bastante débil no solo por las dificultades de hacer eso en un Estado históricamente débil como el ecuatoriano, sino porque requeriría una base social más amplia de la que tiene.

Mi lectura de la base social del gobierno es la siguiente. Primero, tiene un sector empresarial algo más fiel, constituido fundamentalmente por dos grupos. El primer grupo es el de aquellos que, teniendo o no vínculos con el capital transnacional, tienen lo principal de su negocio en el mercado interno. Los casos más paradigmáticos son PRONACA y

SUPERMAXI, pero también muchos medianos y pequeños empresarios de sectores de bienes de consumo cuya principal fuente de acumulación es el mercado nacional. El segundo grupo es el de aquellos grupos empresariales que dependen de los contratos con el Estado y que se han visto muy favorecidos por una ampliación notable de la inversión pública. El caso más emblemático es el del hermano del presidente, que financió la campaña. Segundo, tiene como base sectores de clase media intelectual. Sigue siendo una base importante cuya principal expresión es el propio presidente de la República, que es un académico de clase media que se rodea de grupos de tecnócratas, es decir, intelectuales que no están ligados orgánicamente a algún grupo social importante, sino que su acción funciona dentro del Estado o de las instituciones internacionales. Tercero, y por último, el gobierno tiene también una base social más estable en algunas organizaciones y movimientos sociales, especialmente los pequeños y más fragmentados: los montubios, la CONFEUNASSC, la FENOCIN, la CNC, y ciertos grupos dispersos especialmente en la costa. El gobierno sí tiene una base social real, pero no son factores de poder decisivos, es una base social relativamente frágil, sobre todo para un proyecto político de la envergadura y las ambiciones que hace públicas. En la práctica su política lo está llevando por la pendiente de un aislamiento persistente cuyas complicaciones más visibles se expresan en el bloque parlamentario. Un bloque que jamás tuvo mucha cohesión pero que ahora tiene mucha menos capacidad de llegar a acuerdos. Pero in-

cluso si los logra, luego de innumerables maniobras y pasos en falso, luego el presidente los desautoriza, como ha ocurrido con varias leyes.

El límite de esa política de aislamiento y de confiar toda su fuerza social en las encuestas o en el apoyo electoral difuso de los sectores más desorganizados y despolitizados del país, es que el gobierno ya no tiene una mayoría clara y que se le están quedando todas las leyes en el tintero, al punto que ya el propio Presidente ha dicho que la Ley de comunicación y La ley de aguas no son prioridad, que solo la Ley de educación superior es prioridad. El límite, entonces, es que el apoyo electoral difuso no es suficiente para construir una fuerza política, ni para llevar adelante un programa de gobierno.

En última instancia, la razón por la cual el gobierno no puede aliarse con movimientos sociales o grupos de izquierda y por lo que no es viable ningún tipo de salida pactada o consenso con esos movimientos sociales, es que el gobierno es "estatista" en lo social, no solo en lo económico. Los movimientos sociales desconfían de ese estatismo que los excluye y los separa del manejo del gobierno. Los sectores empresariales son mucho más pragmáticos como para buscar acuerdos puntuales más constantes, pero lo cierto es que el estatismo económico del gobierno, que es lo que atrae, en cambio, a los movimientos sociales, repele y vuelve difícil un acuerdo de largo plazo con amplios sectores empresariales.

Mario Unda. Una aclaración: cuando yo hablaba del corrimiento del gobierno hacia la derecha, me refería a un corri-

miento dentro de su propio proyecto, dentro de las posibilidades de su proyecto; no pienso que sea un retorno hacia la derecha tradicional, neoliberal.

Felipe Burbano. Pienso que nos encontramos en un momento distinto de la Revolución Ciudadana: hemos pasado del momento de la ruptura y la refundación al ejercicio del poder y manejo del Estado. El cambio se inició con la posesión de Correa en enero del 2009 para un segundo período de gobierno. En términos más generales, eso significa preocuparse por el orden y las condiciones de gobernabilidad más que por el cambio. Esa preocupación por el orden estatal explica la tensión con los movimientos sociales. Sin embargo, la tensión surge a partir del propio discurso inicial del gobierno de una democracia participativa y ciudadana. Ese discurso encuentra límites en el nuevo momento político que vive Alianza País, cuando ha dejado de ser una fuerza comprometida con el cambio para ser una fuerza más bien del orden político. No hay ninguna voluntad del gobierno de llevar a la práctica su propia propuesta de una democracia ciudadana y participativa. Esa tensión estalla a partir de las iniciativas de cambio legislativo propuestas por el Ejecutivo. En lugar de abrir el juego político de acuerdo con las reglas planteadas por el discurso de la Revolución, lo cierra y quiere imponer la lógica y racionalidad estrecha del Ejecutivo y del presidente. Quizá se puede decir que vivimos el momento de la institucionalización de la revolución ciudadana después del proceso constituyente, pero una institucionalidad estrecha, cerrada, dominada por una maquinaria de poder instalada en el Ejecu-

tivo y legitimada en el liderazgo personal de Correa. Hoy volvemos a ver la precariedad del presidencialismo ecuatoriano: un Ejecutivo con dificultades para formar mayorías y una activación de protestas y malestar sociales desde sectores afectados por todas las iniciativas de cambio legislativo, que son muchas, levantadas por parte del gobierno. Entramos a los escenarios de bloqueo institucional del presidencialismo ecuatorianos que hemos vivido desde el retorno a la democracia, pero con un elemento nuevo: un presidente con mucho poder personal, con gran popularidad, lo cual crea un escenario distinto. Es un gobierno que no cree en los espacios institucionales, que no entiende el juego parlamentario como un juego de alianzas permanentes, que sigue creyendo en una democracia mayoritaria. El aislamiento del que habla Pablo resulta muy curioso porque es parte de la lógica populista de Correa: establecer siempre una relación de antagonismo con los actores políticos, con el propio sistema y sus instituciones, para legitimarse constantemente como el líder salvador. Es un liderazgo que necesita reproducir, de modo permanente, la ruptura refundacional para legitimarse. Yo no veo que haya una alianza con los empresarios, hay intentos de acercamiento, guiños de ojo, pero tampoco el interés de unirse con ellos. Al gobierno nunca le ha interesado involucrar a los empresarios en su revolución. Ha puesto mucha distancia. Ahora hace lo mismo con la izquierda. Correa quiere estar por encima de todos, como juez supremo, fiel de la balanza, ser la expresión de la justicia total.

Hernán Ibarra. Efectivamente el gobierno de Correa se puso un horizonte que era el de producir cambios institucionales por un camino de la aprobación de leyes que se consideraban básicas para la reestructuración de las relaciones entre el Estado y la sociedad y fijó algunas leyes prioritarias en ese sentido. La pregunta es ¿por qué siempre tiene que ser esta vía de elaborar leyes? Y, ¿por qué no puede haber una vía que puede ser mas bien la de definir políticas públicas que no necesariamente tienen que derivar en leyes? La conclusión final de una política pública podría ser alguna ley, pero la definición de políticas públicas podría pasar más bien por un amplio debate, en busca de consensos. Justamente la condición de que existió una mayoría en la Comisión de Legislación es la que generó ese impulso a desarrollar leyes, pero como esa condición se terminó y emergió una oposición relativa de lado de los actores aliados de Alianza País, ha concluido esa fase de una manera no prevista y abre un escenario de fuerte incertidumbre en el sentido de que las leyes tendrán que ser formuladas ahora en base a pactos y acuerdos. Se puede decir que las políticas públicas de alguna manera están definidas en el Plan la Nacional del Buen Vivir, pero sin un horizonte claro de esas políticas públicas en cuanto a su ejecución y concreción en la relación con la sociedad, porque justamente con la sociedad se ha producido un choque y una ruptura. Es un momento donde puede empezar más bien una pendiente autoritaria de liderazgo político y que podría terminar en una fase de decretismo que refuerce esta tendencia a resolverlo todo por vía de leyes.

Mario Unda. Creo que hay una alianza del gobierno con sectores empresariales; habría que recordar que, desde que Correa llegó al gobierno, intentó acercarse a aquellos grupos de empresarios que no estaban directamente vinculados con la dirección de las Cámaras. Y eso volvió a retomarse desde la crisis mundial (o con pretexto de ella), a través de políticas específicas. En cierto sentido, el contenido social de la política anticrisis es el acercamiento con la clase capitalista, incluida la banca, con la cual el gobierno ha tenido enfrentamientos más o menos profundos, fue la ocasión para postularse como representante del capital en su conjunto.

Otra cosa es el éxito que hayan podido tener esos acercamientos. Un indicio de que no están totalmente desencaminados fue el debate alrededor de la compra de bonos estatales por parte del IESS. Cuando se produce esa decisión, los representantes de los empresarios en el Consejo Superior aprobaron la compra, y Blasco Peñaherrera, a nombre del Comité Empresarial, lanzó una campaña para deslegitimarlos, incluso para pedirles la renuncia inmediatamente, pero no logró un consenso alrededor de su propuesta. Otro indicio está en la elección de la nueva directiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil: aun cuando la persona que gana es muy cercana a la anterior presidenta, aparece ya con un discurso más abierto, que no es el de la confrontación declarada con el gobierno, y que deja abierta la posibilidad de buscar ciertos entendimientos. Aún otro indicio es la rapidez con que Correa respondió a las demandas de grupos empresariales específicos en torno a la Ley

de aguas, en el mismo momento en que atacaba duramente a los indígenas. Al parecer, hay sectores que se distancian de los grupos que tradicionalmente han manejado los gremios de su clase, al tiempo que algunos de esos gremios pueden también flexibilizar su posición frente al gobierno, y entonces confluyen con la perspectiva de las nuevas alianzas gubernamentales. Es lógico: un proyecto como el de Correa, que finalmente es un proyecto de modernización capitalista, difícilmente podrá hacerse solo desde el Estado, que aparece como el sujeto central, incluso en el campo de las inversiones (la inversión pública liderando la marcha de la economía.); requiere necesariamente un acercamiento con grupos capitalistas concretos y específicos.

En cambio, con los movimientos sociales las cosas son diferentes; hay una pugna profunda, que se ha evidenciado con más fuerza en el último tiempo, pero que viene de atrás, desde el comienzo mismo del gobierno (piénsese en Molleturo, en Dayuma), aunque entonces esto pudo quedar obscurecido por el hecho de que, al inicio, todavía era muy fuerte una cierta sensación de que el gobierno era efectivamente distinto y que recogía las demandas y el programa práctico de la movilización social de los últimos 30 años; era fuerte la expectativa de que este gobierno pudiera efectivamente hacer realidad sus promesas de participación, de democracia, etc.; y era fuerte la creencia de que se podría llegar a acuerdos.

Sin embargo, con el tiempo, las experiencias de las organizaciones que han participado en acuerdos con el gobierno

muestran que nunca hubo realmente esa posibilidad. Dirigentes de la FENOCIN han dicho, por ejemplo, que, cada vez que querían plantear algún tema crítico en relación a la alianza que mantenían con el gobierno, se les respondía que no es el momento adecuado porque ahora viene una elección, ahora es el plebiscito para ver si se aprueba la constituyente, ahora son las elecciones de asambleístas, ahora es la aprobación de la constitución, etc. De cualquier manera, siempre los elementos críticos que pretendían poner sobre la mesa eran retrasados, eran preteridos por las urgencias coyunturales de legitimación y afirmación del gobierno. Además, cuando la FENOCIN anuncia su distanciamiento del gobierno, éste actúa más o menos como había actuado con la CONAIE, aunque con un poco más de “suavidad” –si se puede decir así–, es decir tratando de debilitar sus bases a nivel comunitario, zonal y regional, utilizando los típicos mecanismos de cooptación y de clientela, ofreciendo y dando pequeños proyectos, cursillos de capacitación, tenencias políticas, y todo pasando por encima de los niveles organizativos. Así que, aunque no se trate todavía de deslegitimarla públicamente, sí se va restando la capacidad de aglutinación y coordinación que pudieran tener las organizaciones sociales.

Es como si el gobierno entendiese que la afirmación de su proyecto requiere la desestructuración de las formas de organización social que de una u otra manera llevaron adelante los procesos de movilización social del período anterior, las resistencias al neoliberalismo. Por otro lado, pretende, aparentemente

de un modo no muy empeñoso, armarse de organizaciones sociales propias, o por lo menos que respondan a sus directivas. Se habla de los vínculos con una organización shuar, del modo como se formó una organización en Chimborazo, de la manera en que se han utilizado los proyectos, el plan Borrego, el plan Bosque, etc., para dar vida a construcciones organizativas no muy fuertes, pero que le permiten aparentar una cierta legitimidad en los espacios sociales organizados. ¿No fue la Secretaria de Pueblos quien dejó deslizar la idea de desplazar el eje de referencia social desde los indígenas a una combinación de tratamiento particularizado con los sectores afroecuatorianos y los jóvenes a partir de los proyectos estatales?

Recordemos que, ya antes, Correa había hecho llamados públicos a los indígenas para que desconozcan a sus organizaciones y dirigentes (y sigue haciéndolo), de donde resulta que ahora es el gobierno el que tiene que decidir qué dirigentes deben elegir las organizaciones. Más recientemente sucede otro hecho que pudiera parecer anecdótico, pero que es enormemente significativo para comprender la visión que desarrolla el gobierno sobre su relación con los movimientos sociales: me refiero al episodio de la casa de la CONAIE. Ahora el gobierno reclama su devolución para que sirva de sede a muchas organizaciones sociales porque, dice, no es posible que esa casa sirva para una sola organización. Así que ahora el gobierno es el que decide quiénes y cómo van a utilizar los locales de las organizaciones; que el local en mención haya sido recibido en comodato no cambia el fondo del

asunto. Más aún: tanto Correa como Alexandra Ocles han dicho que la CONAIE se ha desviado de sus fines porque ha participado en política. Así que ahora el gobierno es el que decide cuáles son los fines de las organizaciones (y recordemos que argumentos similares se esgrimieron cuando se pretendió cerrar Acción Ecológica).

Tenemos aquí a un gobierno dedicado a deslegitimar la acción política de los movimientos sociales: un gobierno que surgió de la politización de la sociedad, sin la cual no podría haber llegado jamás, ahora está tratando de despolitizar a esa misma sociedad para afirmar su propio proyecto de dominación.

Otro tema que se ha tocado aquí son las dificultades en la aprobación de leyes. Yo creo que es una dificultad real, pero relativa, porque, de cualquier manera, la estructura del Estado ecuatoriano ya era fuertemente presidencialista antes mismo de Correa. Desde la época de Hurtado viene afirmándose una nítida tendencia presidencialista como respuesta para superar reales y posibles impasses institucionales, pero, sobre todo, para poder implementar más expeditivamente los modelos económicos o políticos (a través de mecanismos como los decretos de emergencia, etc.). Lo único que Correa ha hecho es alimentarla y racionalizarla para dar mucha mayor fuerza y “coherencia” al ejecutivo.

Pablo Ospina. El análisis que Mario hace sobre los movimientos sociales tiene muchos paralelismos con el de los empresarios. Igual que el gobierno pretende destruir a las organizaciones grandes y deslegitimar sus estructuras diciendo y buscando que las “bases”

estén con el gobierno, tratando de organizar otras estructuras, se puede decir que lo mismo hace con los empresarios. En efecto, deslegitima las organizaciones representativas de los empresarios y busca acuerdos con unos sectores, grupos o empresarios individuales, pero no es un acuerdo global, no es una base social fiel a un programa determinado. Un ejemplo: el aumento de la presión fiscal, que ha crecido enormemente. El último dato es que los grupos económicos identificados por el SRI han pasado del año pasado de representar el 18% del total del impuesto a la renta a representar el 21,7%. Es decir, ha crecido la presión fiscal sobre los grupos más poderosos. Es claro que las reformas fiscales no han sido del agrado de los sectores empresariales. Otro ejemplo: los recientes ensayos de política agraria alternativa, la creación de la Secretaría de tierras, el intento de crear el impuesto sobre las tierras de más de 25 hectáreas, con toda la moderación que pueda tener, no son cosas que estén agradando a los empresarios agrícolas. No creo que haya un proyecto que globalmente pueda ser calificado como pro – empresarial, aunque algunos sectores y algunos empresarios aislados puedan vincularse pragmáticamente al gobierno.

Esto configura el aislamiento de un proyecto estatista que fundamentalmente busca fortalecer la autonomía del Estado para regular. Recuerdo una opinión de un alto dirigente de Alianza País que manifestaba su asombro frente a la propuesta de Ley de Educación Superior. El mencionaba que todo el mundo decía que era una ley necesaria, que era indispensable mejorar la calidad de las uni-

versidades, pero que al mismo tiempo se las habían arreglado para tener en contra a los rectores, a los estudiantes, a los docentes y a toda la comunidad universitaria. Lo mismo mencionaba sobre la propuesta de duplicar el sueldo a los docentes del sector público y no contar con el apoyo de todos los profesores. Lo que ocurre es que por más que haya muchas cosas interesantes en la Ley de Educación Superior, si se traslada la autoridad para decidir sobre el sistema al gobierno, cualquier otra cosa queda opacada. Su serio problema es considerar las conquistas que los movimientos sociales han tenido a lo largo del último siglo como “mafias” que se han apoderado de segmentos del Estado. Si el gobierno considera que la educación bilingüe, la educación superior, los sindicatos petroleros, y todos los sindicatos del sector público como mafiosos y que lo que hay que hacer es liberar al Estado de esos grupos particulares que lo dominan, entonces es imposible llegar a un acuerdo. Hay una diferencia de fondo. Hay muchos sectores sociales que estarían dispuestos a negociar cosas más razonablemente, pero aquí hay una posición muy firme del Presidente que ha convertido todo esto en una política de Estado, una política sistemática, coherente hasta el dogmatismo. Este desacuerdo de fondo lo aleja de las organizaciones y le impide acuerdos estables con grupos de la sociedad que hubieran podido ser sus aliados.

MI opinión es que el gobierno sí tiene políticas públicas más allá de la búsqueda de aprobar nuevas leyes. He visto en varios lugares fuera de Quito que de pronto las entidades públicas em-

piezan a tener programas propios, buenos, malos o mal diseñados, pero programas que antes no tenía. En la época neoliberal eran los gobiernos locales los únicos que hacían cosas, pero ahora resulta que hay el bono del 5-5-5, el bono de la vivienda, una serie de políticas de promoción de “clusters” en varias cadenas de productos. Por primera vez en décadas, el Estado tiene fondos propios para hacer algo decidido por el propio Estado, no algo definido por algún programa de una entidad de cooperación o de un programa de Banco Mundial. Su problema es otro. El último dato del SENPLADES y del presidente del Banco Central es que en este año 2010 solo han podido gastar el 25% de lo programado. Evidentemente tienen un problema de ineficacia que al mismo tiempo se combina con una necesidad de rentas. Tienen simultáneamente un grave déficit y una necesidad de gastar más dinero. A pesar de todas estas ineficiencias, por primera vez el Estado tiene acciones, es mucho más fuerte y eso se nota en los territorios. De hecho, sería impensable el apoyo popular que tiene el gobierno sin eso. Entonces, en mi opinión, sí hay políticas públicas y éstas no se agotan en la discusión de las leyes. Ahora bien, estas políticas no siempre son coherentes; en cada área de gobierno puede haber diferentes balances de fuerzas, unos más cercanos a los empresarios (como la Ministra Coordinadora de la Producción), otros un poco menos (como la Ministra Coordinadora de Patrimonio), otros con interés de pelearse menos con los movimientos sociales, etc. Lo que ocurre es que en esa configuración heterogénea que tiene el gobierno, con las

capacidades que ha logrado desarrollar, a pesar de todas las limitaciones, se está viendo que el límite principal de su proyecto es el estar aislado de la sociedad y de las fuerzas sociales que podrían ser su base. El corolario es buscar y plantear un proyecto demasiado centrado en el Estado.

Mario Unda. El enfrentamiento del gobierno con las cámaras empresariales y con los movimientos sociales, muestra cómo el gobierno está intentando afirmar su hegemonía, porque está atacando tanto a los instrumentos de la hegemonía neoliberal anterior, cuanto a los instrumentos de las luchas contrahegemónicas populares. Hay una lógica en crear un vacío en este tipo de espacios para construir un escenario en el cual puedan empezar a funcionar instrumentos hegemónicos propios del gobierno, instrumentos un poco más racionales, se podría decir, porque, hasta ahora, sus principales herramientas de hegemonía han sido las políticas públicas, sobre todo las políticas sociales (que continúan teniendo el sello de la focalización, el asistencialismo y la clientela) y el propio discurso de Correa. El gobierno, pese a que se mantiene un alto nivel de credibilidad en el presidente, tiene debilidades en cuanto a la construcción hegemónica.

Por otro lado, en relación con las políticas públicas habría que hacer una diferenciación entre las políticas concretas, que se aplican inmediatamente, y otro nivel superior de políticas globales. Todos los bonos, el socio bosque, el socio país, el socio tienda, el socio borrego, no han sido suficientes hasta ahora para dar por resultado una política coherente en torno a la economía popular

y solidaria. Son políticas fragmentadas que no logran configurar una propuesta general. Teóricamente podría ser posible una política general, pero lo cierto es que el gobierno no lo ha hecho; y hasta ahora, a los cuatro años de iniciado el primer gobierno de Correa, siguen intentando dotarse de una política sobre esta economía popular y solidaria.

Felipe Burbano. Yo sigo dudando de que haya un intento de Correa por establecer un vínculo más fuerte con los empresarios y que eso se pueda interpretar como un desplazamiento de su orientación ideológica hacia el centro o hacia la derecha. El gobierno tiene que gobernar, perdón por la redundancia, y responder a las dificultades que supone el fin del momento refundacional, con todas las expectativas de cambio generadas. Los movimientos sociales quieren profundizar el cambio. El gobierno tiene respuestas puntuales a demandas que vienen desde los distintos sectores pero ubicándose por encima de todos ellos. Ahora, es probable que haya condiciones para una alianza con sectores empresariales relacionados con la nueva política de sustitución selectiva de industrias, una suerte de empresariado nacional, vinculado con el mercado interno, que responde a la iniciativa de Correa. Pero no veo nada consistente por ese lado. En parte, porque se trata de un gobierno muy tecnocrático, que impone desde arriba sus visiones y proyectos, sin voluntad de entendimientos, diálogos y acuerdos. En conjunto, veo más tensiones fuertes entre el gobierno y los empresarios, que espacios de alianzas claras. Si en algún momento este gobierno llega a estar debilitado, en riesgo,

los empresarios no van hacer nada por salvarlo.

De otro lado, las bases sociales del gobierno siempre han sido precarias. Correa es un outsider de la política, un líder que aparece en un momento de inestabilidad, de protestas, con un modelo económico agotado, partidos desprestigiados, desencanto democrático y demandas por recuperar el Estado y la soberanía. Correa recoge ese proceso; cuando cae en sus manos le da una cierta forma política, traduce ese malestar en una propuesta de refundación nacional. Pero una vez que le da forma política, desarrolla su propia racionalidad y lógica. El mecanismo a través del cual se fue fortaleciendo el liderazgo de Correa, y al mismo tiempo diferenciándose del movimiento social, fue toda esa serie de eventos electorales, plebiscitarios de algún modo, que llevaron a la Asamblea, a la elección de asambleístas, a la aprobación de la nueva Constitución y a la reelección de Correa. Ese proceso, que buscaba legitimar la refundación nacional, consolidó, de modo simultáneo, una estructura de poder cerrada y concentrada alrededor de Correa. Creo que esa estructura de poder es la que mueve hoy los hilos del Ejecutivo y define el carácter de Alianza País. No se puede hablar de una construcción hegemónica desde Correa, sino más bien de un liderazgo carismático. Es una estructura de poder que opera desde un Estado fortalecido y que se legitima en el liderazgo de Correa. Tenemos un presidencialismo muy fuerte, con tentaciones y prácticas autoritarias muy claras, y que, eventualmente, en un escenario de bloqueo institucional, puede recurrir a la muerte

cruzada para afianzarse. Una estructura de poder sin claras conexiones sociales, sin bases sociales, de allí que, como decía Hernán, proponga un cambio desde una lógica jurídica. Es un proceso que empieza a quedarse en el aire, en términos sociales, sin políticas públicas claras, pero con un manejo político inteligente, hábil, estratégico del Estado y de sus recursos. Se ha movilizad muchos recursos, se ha reconfigurado el aparato estatal, se ha hecho rediseños institucionales, pero no es fácil saber la consistencia de todo el proceso. La interrogante surge del vínculo personal, clientelístico, paternal, de Correa hacia los sectores populares. Vemos ahora como esa vinculación directa lleva a cuestionar a las organizaciones sociales acusándolas de cualquier cosa.

Pablo Ospina. A veces usamos la expresión "políticas públicas" como un tipo ideal que no sé si exista en algún Estado (tal vez en los países escandinavos). Me parece que el gobierno cuenta con una serie de herramientas, de programas y de proyectos estatales. También tenemos una justificación, una elaboración en documentos del sentido de largo plazo y de mediano plazo de esos instrumentos, de cada uno de esos programas. Y luego, finalmente, tenemos el *Plan Nacional del Buen Vivir* donde se articulan todos esos programas discursivamente. Yo veo una coherencia, lo que pasa es que son programas estatales, en un Estado que es estructuralmente débil, y por eso parecen relativamente incoherentes. Dentro de ese marco de limitaciones estructurales, si hay algún gobierno que haya tenido políticas públicas es éste (con las enormes dificulta-

des que encuentra en la práctica y que ya mencioné). Veo un proyecto económico de Estado, veo un rediseño, una cierta coherencia dentro de ese marco, pero también hay pasos en falso, forcejeos dentro del propio gobierno, pero limitadas también por la centralización en la figura del Presidente. En este gobierno los ministros no pueden salir a decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa por su cuenta. La centralización presidencial impone dentro del mismo ejecutivo una mayor consistencia general de las políticas, obviamente dentro del marco de todas las imitaciones propias de la realidad ecuatoriana. En síntesis, es claro para mí que sí hay un proyecto político bastante coherente.

Mario Unda. Quiero referirme a algunos temas. En primer lugar, que exista fragmentación no necesariamente quiere decir que haya incoherencia. Hay líneas que son más o menos claras, y pueden distinguirse en diversas áreas sin mucha dificultad.

En segundo lugar, las alianzas de los grandes grupos capitalistas con los gobiernos por lo general han tenido esa característica, aun con gobiernos que han sido mucho más cercanos a ellos. El caso evidente es el de Mahuad, quien fue puesto por sectores empresariales, y no solamente que no lo defendieron, sino que un poco antes de su caída estaban literalmente pidiendo su destitución: Joyce de Ginatta dijo que el Estado es como una empresa, y cuando el gerente ya no sirve, hay que cambiarlo. Esa es la visión que los grupos empresariales tienen del Estado. Así que la alianza del gobierno con los empresarios no debería medirse con la fidelidad de las burgue-

sías al proyecto gubernamental; hay otras lógicas en esas alianzas que pasan por intereses inmediatos de negocios y por la correspondencia del proyecto político con el movimiento real del capital.

En tercer lugar, el presidencialismo: tal vez pudiéramos decir que se trata de un presidencialismo distinto porque esta vez es un presidencialismo de las clases medias, y no de la burguesía propiamente tal. La mentalidad de las clases medias en relación con el Estado, con la sociedad y con los liderazgos, configuran una forma particular de presidencialismo. De cualquier manera, la tendencia del Estado ecuatoriano ha sido presidencialista. A las clases medias quiteñas les encanta hablar de Rodrigo Borja, de su calidad de estadista, etc., pero, con sus buenos modales, también tuvo una política de acaparamiento de poderes; lo que pasa es que los modales de Borja enmascaraban un tanto esa concentración de poderes. Lo que no ocurre con Correa, por sus propios modales, como tampoco ocurrió con Bucaram, Febres Cordero o Lucio Gutiérrez, lo que, por supuesto, no significa que sean iguales. En todo caso, hay una tendencia clara que atraviesa a todos estos gobiernos: desde los años ochenta hasta la actualidad, el presidencialismo ha ido ganando espacio.

Felipe Burbano. Este es un presidencialismo distinto, opera con un proyecto de Estado coherente en sus objetivos, en sus fines, en sus definiciones, y eso cambia el escenario político del presidencialismo tal como lo tuvimos bajo el modelo neoliberal. Al mismo tiempo, la lógica populista de Correa, a diferencia de experiencias anteriores en el Ecuador,

tiene un proyecto estatal, una visión del conjunto de la sociedad con una proyección del tiempo. Además, es un presidencialismo con otros recursos para actuar y enfrentar las dificultades políticas: un Estado fuerte y un presidente fuerte, con apelaciones populistas muy eficaces hacia los sectores populares. La muerte cruzada, por ejemplo, es un recurso que está ahí y que puede ser movilizado en caso de un bloqueo institucional muy fuerte. No solo la muerte cruzada, también los decretos de emergencia, las consultas populares, los vetos presidenciales. El presidencialismo de la larga noche neoliberal se diluía en la propia debilidad de los presidentes, en la crisis económica, en la protesta social y en la fragmentación de la clase política. Todavía veo un escenario muy articulado alrededor de Correa y su núcleo de poder, pero hay señales confusas.

Pablo Ospina. Retomando la idea del momento fundacional que mencionaba Felipe, me parece que en el momento inicial, durante el período de la Asamblea Constituyente y de toda esta retórica ciudadana, había una diferencia crucial: en ese período, la base social potencial del gobierno era mucho mayor y había muchos más intentos de establecer puentes y lazos, de crear articulaciones. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el cual eso se perdió irremediablemente. Rafael Correa no es una persona apta para la negociación, él no está negociando. No lo hace de manera eficaz porque en la práctica que no lo quiere, no lo interesa, no está dispuesto. Lo que marca la racionalidad última de su acción política es tratar de quedarse con el mayor margen de acción posible

y con la mayor libertad de maniobra de la que sea capaz. Negociar es atarse de manos, llegar a compromisos que tienes de cumplir. Por eso, incluso cuando negociación parece que no lo hace.

Mario Unda. Es que Correa entiende la negociación, sobre todo con las clases subalternas, como simple y pura aceptación de su proyecto; es un tipo de negociación que, en un sentido literal, no es mucha negociación que digamos. La hegemonía supondría alianzas de clases en la lectura más gramsciana, pero una manera distinta de entender las alianzas puede tenerse siguiendo a Laclau: la acción hegemónica se produciría en las demandas y a partir de las demandas, y no necesariamente en las alianzas explícitas de clase; se podría decir que es una suerte alianza discursiva, una alianza de los términos en que discursivamente distintas demandas (o, mejor: distintas maneras de representación de las demandas) son puestas a consideración de la sociedad, de tal forma que una de ellas puede servir como una suerte de mínimo común denominador de un conjunto de experiencias sociales que se expresan, ahí sí, necesariamente de un modo fragmentado.

Felipe Burbano. Si uno mira al gobierno desde esa perspectiva, podría pensar que su capacidad de hegemonía discursiva, de crear un mínimo común denominador entre distintas demandas sociales, una suerte de bloque popular que se enfrenta desde una identidad común a un enemigo, empieza a desvanecerse porque el enemigo se ha desdibujado. La larga noche neoliberal, la partidocracia, los pelucones, con todas sus secuelas, dejan de articular una iden-

tividad común alrededor de un proyecto de cambio. Es parte del fin del momento refundacional y de la institucionalización de la revolución a través de una estructura de poder cerrada y centralizadas. En ese sentido se puede hablar de institucionalización: se imponen unas reglas del juego definidas desde una estructura cerrada de poder, que busca ser preservada.

Mario Unda. Hay una diferencia clara entre lo que fue el populismo latinoamericano tradicional (por ejemplo, el peronismo), y la experiencia de Correa; en el peronismo hubo una alianza con sectores populares organizados, el peronismo constituyó una nueva expresión orgánica del movimiento sindical y finalmente acabó convirtiéndose en el denominador absoluto de la representación obrera en la Argentina; se sustentó en formas organizativas fuertes, tal como lo hizo el populismo mexicano de Cárdenas, o el de Vargas en Brasil. En cambio, la particularidad de Correa es que está enfrentado a los sectores organizados.

Felipe Burbano. Las demandas de los diferentes actores y movimientos se han desprendido del discurso hegemónico de Correa, ya no le siguen, plantean los temas desde perspectivas propias. Aparece un movimiento indígena con su propia demanda de materializar el Estado plurinacional, el movimiento de los ecologistas con sus críticas al extractivismo, las universidades con su defensa

de la autonomía; todas esas demandas, o respuestas a iniciativas del Ejecutivo, han roto con el discurso hegemónico de Correa, de allí la virulencia con la que ataca a los indios, al ecologismo infantil, la manera como desprestigia a las universidades. Esa autonomía de las demandas sociales le incomoda a un proyecto que sigue entendiéndose a sí mismo como hegemónico, como el único con plena legitimidad democrática. La lógica refundacional, instalada en el poder, se traduce ahora en una lógica autoritaria, no en una lógica democrática de alianzas y pluralismo.

Mario Unda. El discurso de Correa tuvo muchas facilidades cuando el conjunto de las demandas se sintetizaron en una fórmula propia de él, que era la “revolución ciudadana” y el enfrentamiento a la “partidocracia”. Eso le permitió unificar todas las demandas y transformarlas, para que sean funcionales a la hegemonía de su proyecto; en cambio, ahora ya no es tan fácil. Ese límite se intenta resolver buscando un enfrentamiento de los sectores fragmentados y desorganizados —que son su verdadera base social, electoral y de respaldo— con los sectores organizados. Esto era un giro impensable en los primeros pasos de la “revolución ciudadana”, cuando el momento fundacional buscaba asumir una amplia hegemonía “inclusiva”.